

La cumbre de Montelimar y las perspectivas de paz en Centroamérica

La sorpresiva derrota electoral del Frente Sandinista abrió un panorama de nuevas posibilidades para replantear las alternativas de solución al prolongado y costoso conflicto regional. Esto es así, sobre todo, porque el gobierno nicaragüense concibió las elecciones de febrero como el mecanismo más idóneo, en el marco de Esquipulas II, para impulsar la consolidación de la democracia real en el país y deslegitimar definitivamente la agresión norteamericana. De esta suerte, si bien el chantaje norteamericano —militar y económico— sobre el pueblo nicaragüense rindió tangencialmente sus tardíos frutos bajo la fachada del libre juego democrático, ello no significa necesariamente el fin de la revolución nicaragüense. En cambio, la nueva coyuntura sí ofrece a Washington la oportunidad histórica para encontrar una salida elegante a su desafortunada e insensata política para la región. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno norteamericano ha desaprovechado, a propósito presumiblemente, dicha coyuntura para contribuir decisivamente a la consolidación de los dinamismos distensionadores de Esquipulas II. Muestra objetiva de ello es la falta de presión efectiva sobre las fuerzas antisandinistas para forzarlas a desmovilizarse y desarmarse; la reticencia y estrechez de criterios para financiar la democracia y el desarrollo de Nicaragua y Panamá; y, finalmente, la falta de determinación para explorar con seriedad el proceso de negociación como vía de solución para el conflicto de El Salvador.

Obviamente los burócratas del Departamento

de Estado tienen en mente algo más que lograr la paz de la región y en función de sus ocultos propósitos nos presentan una ambigua política exterior. Más desconcertante resulta, sin embargo, la falta de visión política de los gobernantes centroamericanos para extraer las importantes lecciones reveladas en los resultados de los comicios nicaragüenses. Ello se refleja en la interpretación que los gobernantes del área han externado sobre el significado de la derrota sandinista en la urnas y, ante todo, en el rol asignado al proceso de Esquipulas II para continuar con la tarea de proporcionar a la región paz, estabilidad y recuperación económica.

El 2 y 3 de abril se celebró, en efecto, la séptima reunión cumbre de presidentes centroamericanos en Montelimar, balneario del Pacífico nicaragüense. La cita fue convocada bajo un inusual optimismo de sus protagonistas ante los avances registrados en las iniciativas de distensión. De hecho, ninguna de las citas presidenciales anteriores estuvo precedida de tantos indicios prometedores para la buena marcha de los procesos de democratización y de pacificación. En el ámbito regional, ciertamente, se asistía al reinicio del proceso de diálogo entre el gobierno de El Salvador y el FMLN bajo los buenos oficios del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar; las conversaciones sostenidas en Oslo en esos días, entre miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala y representantes de la insurgencia de este país, para preparar

el terreno para futuras negociaciones tendientes a poner fin a treinta años de lucha irregular, dejaban espacio también a expectativas esperanzadoras.

El proceso político nicaragüense, entretanto, cosechaba nuevos y positivos avances. Tras un mes de intensas y muy secretas negociaciones, los equipos de transición designados por el presidente Ortega y la presidente electa Violeta de Chamorro firmaban un importante protocolo de procedimiento que garantizaría la entrega pacífica del poder. El acuerdo de Toncontín, por su parte, en donde los contras aceptaban por primera vez su desmovilización, marcaba el fin de la larga e indeseable presencia antisandinista en territorio hondureño. La dos últimas características de la coyuntura regional mostraban un insospechado pragmatismo político y una notable madurez histórica entre los actores nacionales del drama nicaragüense. En este sentido, Nicaragua se colocaba una vez más a la vanguardia de los esfuerzos de democratización y pacificación, y se constituía en el modelo de solución —toda vez que se asumiera creativamente— para los otros conflictos bélicos de la región. Esta era, al menos, la perspectiva que el presidente Ortega propuso al resto de su colegas para comprender objetivamente los elementos que conformaban la nueva coyuntura centroamericana. “Estamos cerrando una primera etapa que ha estado vinculada al proceso que ha vivido el pueblo nicaragüense de enfrentamiento con la política de Estados Unidos: la agresión, el embargo, los contras, etc. ...; los pasos de Nicaragua sirven —sostenía Ortega— como puntos de apoyo para que los pueblos centroamericanos tomen el ejemplo para afirmarse allí y catapultar la democracia en otros países”.

No ha sido ésta, lamentablemente, la interpretación predominante en el desarrollo de la cita presidencial. Todo parece indicar, ciertamente, que en el ánimo de los gobernantes de la región —con la “homologación” del sistema político nicaragüense al de sus vecinas “democracias”— el proceso de Esquipulas II podría darse por concluido. Su única misión, en el mejor de los casos, estaría, dentro del nuevo contexto, en la búsqueda de inversionistas potenciales en la región y en la discusión de cuestiones económicas. Las necesi-

rias y urgentes reformas jurídicas, políticas y económicas dentro de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para garantizar el respeto a los derechos humanos y la reconciliación nacional no tendrían razón de ser. Se da por supuesto, en el análisis interesado de las cancillerías locales, que la efectiva consolidación de la democracia real es un hecho objetivo en la región. Nada más alejado de la realidad vivida cotidianamente por las amplias mayorías populares de todo el istmo. La conclusión anterior no se desprende, naturalmente, del contenido de la declaración de Montelimar, sino del curso de los acontecimientos después de la celebración de la cumbre y de la voluntad política manifestada por los gobernantes del área a lo largo del despliegue de Esquipulas II.

De hecho, el documento suscrito fue calificado unánimemente por los participantes del encuentro presidencial como de “una buena declaración”. La cita, asimismo, transcurrió en un ambiente de cordialidad entre los gobernantes y lo anecdótico dio un nuevo tono a la historia de los encuentros presidenciales. Con esto la declaración de Monte-



limar resultó de fácil gestación. En sus puntos medulares el documento en cuestión exige la ejecución inmediata de la desmovilización de las fuerzas antisandinistas. Tal solicitud ha sido reiterada en los últimos tres encuentros presidenciales y por falta de respaldo del gobierno norteamericano no ha podido dar paso al efectivo desmantelamiento de esas fuerzas irregulares. Para este fin, los presidentes solicitaron —como elementos novedosos respecto de las anteriores peticiones— a ONUCA y a la CIAV dar los pasos necesarios para garantizar dicho proceso, y al gobierno norteamericano facilitar el financiamiento del mismo. Los presidentes acordaron que las armas de los antisandinistas deberían ser destruidas *in situ* como símbolo del anhelo regional de convertir a Centroamérica en una “zona de paz, de seguridad y libre de toda presencia militar”. Por otra parte, manifestaron su “complacencia por el pronto reinicio” de los esfuerzos de los gobiernos de El Salvador y Guatemala para reincorporar a las fuerzas insurgentes de sus respectivos países a la vida civil y política. Formalmente, este punto de la declaración es tan sólo un pronunciamiento de “cortesía”; pero no cabe duda que, si estos esfuerzos cristalizaran en el corto plazo en la puesta en marcha de un proceso serio de reconciliación nacional similar al experimentado en Nicaragua, la región entera podría emprender las tareas pendientes en materia de seguridad y desarrollo económico.

Bajo esta proyección de futuro, los presidentes acordaron impulsar y calendarizar las negociaciones regionales para reducir el tamaño de los ejércitos locales. Este aspecto crucial para la democratización y pacificación fue, sin embargo, delegado a una “comisión especial” para su promoción. De igual manera, los gobernantes acordaron enfrentar con decisión el desafío económico. Así, la próxima cumbre será convocada exclusivamente para discutir los puntos concretos que atañen a la integración económica regional y para diseñar una estrategia de renegociación conjunta de las deudas exteriores. No obstante, para el presidente Ortega, la búsqueda de estabilidad y desarrollo para la región debería ser emprendida bajo el principio de que “en el campo económico los esfuerzos no deben ser solamente para for-

talear el intercambio y buscar ayuda externa, sino para buscar mejor distribución económica y acortar la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen”. Sin tal perspectiva, sobra decir, la recuperación económica aporta una aparente estabilidad.

La cumbre de Montelimar sirvió de marco de despedida de los esfuerzos regionales de paz a los gobernantes de Nicaragua y Costa Rica, Daniel Ortega y Oscar Arias, respectivamente. Esquipulas II, entonces, continuará su marcha como proceso de pacificación, conducido por nuevos presidentes con nuevos carismas, pero, presumiblemente seguirá siendo viable, en la medida que los dinamismos estructurales de la realidad histórica de la región lo continúen exigiendo para poner fin con medios políticos a la costosa década de confrontaciones bélicas. De esta suerte, el presidente Arias salió satisfecho con los resultados alcanzados en la última de sus reuniones cumbres. “Fue una reunión en la que dejamos atrás una Centroamérica de muerte, y la hemos cambiado por una de vida y esperanza”, aseguró. Según Arias, bajo su inspiración el proceso regional habría madurado significativamente de modo que, en el futuro, “los presidentes tendrán reuniones con menos tensión que las que tuvimos nosotros en estas siete citas, porque ahora ya no serán para hablar de desmovilización de fuerzas insurgentes, para dialogar, para declarar amnistía, para abrir las cárceles, en fin, tantas cosas tristes que hemos vivido”. La realidad actual parece contradecir la optimista evaluación del ex gobernante costarricense. Hace falta todavía mucha voluntad política y medidas todavía radicales por parte de los protagonistas del conflicto regional para avizorar su inminente fin. De hecho, por razones perentorias por supuesto, la desmovilización de las fuerzas antisandinistas aún no ha cristalizado y el logro de la reconciliación nacional en El Salvador y Guatemala tiene todavía un largo y tortuoso camino por delante. Sin avanzar significativamente en la consecución de tales objetivos, la paz estable y duradera para la región es, naturalmente, una lejana utopía.

A. S.